

## **Cómo Israel evade la jurisdicción de la CPI**

¿Qué pasaría si la Corte Penal Internacional (CPI), encargada de perseguir los peores crímenes del mundo, fuera impotente ante la astuta evasión de una nación? Israel ha convertido el principio de complementariedad de la CPI en un escudo, obstruyendo investigaciones independientes con pesquisas falsas. Este ensayo expone cómo Israel explota esta laguna legal, impone un sistema de justicia dual que favorece a los colonos violentos sobre los palestinos oprimidos y se apoya en sanciones estadounidenses que paralizan a los jueces de la CPI a través de SWIFT, Mastercard/Visa y listas de exclusión aérea. Los masacres de Hind Rajab y de los paramédicos de Rafah revelan la profundidad de esta estrategia, exigiendo una acción internacional urgente.

### **Explotación del principio de complementariedad**

El principio de complementariedad de la CPI, consagrado en el Artículo 17 del Estatuto de Roma, permite la intervención solo cuando un estado “no está dispuesto o no puede” perseguir genuinamente los crímenes dentro de su jurisdicción. Israel explota cínicamente esta disposición realizando investigaciones internas superficiales que sirven como fachada para frustrar la supervisión de la CPI. Las masacres de Hind Rajab en enero de 2024 y de los paramédicos de Rafah el 23 de marzo de 2025 ejemplifican esta táctica. En el caso de Hind Rajab, las FDI negaron inicialmente cualquier implicación, alegando que no había tropas cerca del lugar donde una niña de 6 años y su familia fueron asesinadas por fuego de tanque, y una ambulancia enviada para rescatarlos fue destruida, matando a dos paramédicos. Solo después de que pruebas de video e investigaciones independientes de Forensic Architecture probaran la responsabilidad de un tanque de las FDI, estas admitieron “errores”, pero no se presentaron cargos penales, solo una revisión preliminar que absolvió a los soldados de cualquier delito. De manera similar, en la masacre de Rafah, las FDI afirmaron falsamente que los vehículos humanitarios eran “sospechosos” y estaban vinculados con Hamás, matando a 15 trabajadores humanitarios, incluidos personal del PRCS y de la ONU, en un ataque estilo ejecución. Las grabaciones de video desmintieron posteriormente esta narrativa, obligando a las FDI a reconocer errores, pero su investigación del 20 de abril de 2025 concluyó con meros hallazgos de “mala conducta profesional”, destituyendo a un subcomandante y disciplinando a otro sin responsabilidad penal.

Estas investigaciones no son ni independientes ni rigurosas, ya que dependen de testimonios autocomplacientes de soldados mientras descartan pruebas de las víctimas y informes de derechos humanos. El patrón de las FDI —iniciar 47 investigaciones tras la guerra de Gaza de 2008-2009 con menos del 1 % de acusaciones— subraya su falta de voluntad para perseguir genuinamente. Israel desafía además la autoridad de la CPI, disputando la condición de estado de Palestina a pesar de su adhesión al Estatuto de Roma en 2015, una postura rechazada por la Sala de Cuestiones Preliminares I el 21 de noviembre de 2024, cuando confirmó la jurisdicción y emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. Las recientes sanciones estadounidenses contra los jueces de la CPI, anunciadas el 5 de ju-

nio de 2025 por el Secretario de Estado Marco Rubio, exacerban esta evasión. Dirigidas contra los jueces Solomy Balungi Bossa, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou y Beti Hohler, estas medidas bloquean activos estadounidenses e imponen prohibiciones de viaje, probablemente congelando sus cuentas bancarias a través de la red SWIFT y suspendiendo los servicios de Mastercard/Visa, como se vio con el acceso interrumpido del fiscal Khan. Este apoyo estadounidense, basado en afirmaciones de soberanía, retrasa los procedimientos de la CPI, consolidando la evasión de Israel como un abuso deliberado de la complementariedad para eludir la justicia por atrocidades documentadas.

### **Estándares judiciales divergentes: palestinos vs. colonos violentos**

El sistema judicial de Israel opera como una herramienta de opresión, imponiendo un régimen legal dual que viola el mandato de la Cuarta Convención de Ginebra para una protección igual en los territorios ocupados. Los palestinos, incluidos niños de hasta 12 años, están sujetos a un sistema de tribunales militarizados que castiga delitos menores como lanzar piedras con medidas draconianas. Defense for Children Palestine informa que entre 500 y 700 niños son detenidos anualmente, enfrentándose a violencia, confinamiento solitario y confesiones forzadas sin representación legal, según documentó Human Rights Watch en su informe de 2015 sobre abusos de las fuerzas de seguridad. En 2022, se detuvieron 137 niños, y en 2023 se registró un aumento mortal, incluidos asesinatos de menores por francotiradores, según una investigación de The Guardian de 2024. Estos casos a menudo resultan en prisión, contraviniendo la Convención sobre los Derechos del Niño.

En marcado contraste, los colonos israelíes violentos —más de 700,000 en Cisjordania— operan bajo la ley civil, disfrutando de impunidad por el robo de tierras y ataques. El informe de B'Tselem de 2021, “Un régimen de supremacía judía”, detalla cómo los colonos, armados y apoyados por puestos avanzados de las FDI, se apoderan de más del 50 % de las tierras de Cisjordania mediante incendios provocados, palizas y asesinatos. El ataque incendiario de Duma en 2015, que mató a una familia palestina, resultó en la condena de un solo colono tras años de retrasos, mientras otros escaparon de la justicia. El informe de Addameer de 2023 confirma que los tribunales militares excluyen a los colonos, quienes se benefician de procedimientos civiles indulgentes o de ninguno, con el Tribunal Superior de Justicia aprobando las confiscaciones de tierras como medidas de “seguridad”. Esta disparidad consolida un sistema de dominación racial, una clara violación de la definición de apartheid del Estatuto de Roma.

### **Estudios de caso: Masacres de Hind Rajab y de los paramédicos de Rafah**

Las masacres de Hind Rajab y de los paramédicos de Rafah son ilustraciones condenatorias de las tácticas de evasión de Israel. En enero de 2024, Hind, una niña de 6 años, y su familia fueron asesinadas por fuego de tanque de las FDI en la ciudad de Gaza, y un intento de rescate en ambulancia también fue atacado, matando a los paramédicos Yousef Zeino y Ahmed al-Madhoun. Las FDI mintieron, afirmando que no había tropas presentes, hasta que una investigación de Forensic Architecture en 2024, respaldada por pruebas de video y audio, demostró lo contrario, mostrando que el tanque disparó desde 13-23 metros. No se presentaron cargos penales —los soldados fueron absueltos bajo el pretexto

de “mala conducta profesional”. Asimismo, el ataque de Rafah del 23 de marzo de 2025 mató a 15 trabajadores humanitarios, incluidos personal del PRCS y de la ONU, en un ataque contra ambulancias y un vehículo de la ONU. Las FDI alegaron falsamente vínculos con Hamás, pero las pruebas de video de un teléfono de un paramédico expusieron la mentira, mostrando vehículos bajo fuego con las luces encendidas. La investigación del 20 de abril de 2025 encontró solo “fallos profesionales”, destituyendo a un subcomandante sin responsabilidad penal, a pesar de que las autopsias confirmaron asesinatos intencionales.

Estos casos destacan el patrón de Israel: mentir hasta que surjan pruebas irrefutables, luego realizar investigaciones falsas para absolver a los perpetradores, explotando la complementariedad para bloquear la jurisdicción de la CPI. Las sanciones estadounidenses contra los jueces de la CPI, que perturban sus capacidades financieras y de viaje, refuerzan aún más esta impunidad, dejando al tribunal impotente para actuar.

### **Fundamento legal e implicaciones internacionales**

Las acciones de Israel violan la Convención sobre el Apartheid y el Estatuto de Roma, que definen el apartheid como la opresión sistemática de un grupo racial sobre otro. Los informes de Human Rights Watch de 2021 y de Amnesty International de 2022 concluyen que las políticas de Israel cumplen con este umbral, citando leyes discriminatorias, restricciones de movimiento y asesinatos. El Relator Especial de la ONU en 2022 afirmó la existencia de apartheid en los territorios ocupados, un hallazgo que Israel desestima como político. La incapacidad de la CPI para anular estas investigaciones falsas —a pesar de las órdenes de arresto de 2024— se ve agravada por las sanciones estadounidenses. La red SWIFT, bajo la jurisdicción de EE. UU., obliga a los bancos globales a congelar las cuentas de los jueces, mientras que Mastercard/Visa suspende los servicios de crédito, y la inclusión en listas de exclusión aérea restringe los viajes, como se vio en el caso de Khan. La CPI y la ONU condenan esto como un ataque a la justicia, con la UE proponiendo un estatuto de bloqueo, pero la evasión de Israel persiste.

La evasión de Israel de la jurisdicción de la CPI es una estrategia calculada, que abusa de la complementariedad para mantener un sistema legal de dos niveles que oprime a los palestinos mientras protege a los colonos y soldados. Las masacres de Hind Rajab y Rafah, con sus mentiras expuestas y la absolución de culpas, junto con las sanciones estadounidenses que paralizan a los jueces de la CPI, son pruebas irrefutables de este régimen. La comunidad internacional debe actuar —exigiendo investigaciones independientes, imponiendo contrasanciones y ejecutando las órdenes de arresto de la CPI— para dismantelar esta estructura similar al apartheid y entregar justicia a las víctimas.